

Esta serie de Documentos es editada por el Programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en Santiago de Chile. Las opiniones que en los documentos se presentan, así como los análisis e interpretaciones que en ellos se contienen, son de la responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Facultad.

Programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Santiago de Chile

Programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Santiago de Chile

Programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Santiago de Chile

RESUMEN

Este trabajo analiza el resurgimiento de los partidos de derecha desde 1983 a 1988, en los momentos previos al Plebiscito de ese mismo año.

La primera parte del trabajo se refiere al contexto político global, estudiando básicamente los efectos producidos por la gestión ministerial de Jarpa y por el desarrollo de las protestas que comienzan en Mayo de 1983.

La segunda parte del trabajo estudia los primeros gérmenes de la organización política de la derecha, previos a la fecha indicada.

La tercera parte del trabajo está dedicada a reseñar el surgimiento de las múltiples expresiones políticas de derecha aparecidas desde 1983 para adelante.

of the ...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

LOS PARTIDOS POLITICOS DE DERECHA EN CHILE: 1983-1986

El análisis de las formas de estructuración y comportamiento político de los diferentes grupos en que se organiza la derecha desde 1983 en adelante se realizará en dos partes. En primer lugar se abordará el contexto global en que tiene lugar esa recomposición política; en segundo lugar se estudiará el proceso de formación de partidos de derecha, gatillada por la operación política que Jarpa desarrolla desde el Ministerio del Interior.

I. EL CONTEXTO

Para entender la reaparición de la forma partidaria en la acción política de las clases dominantes y la estructuración multipartidaria de ese sector, los cuales aparecen a partir de la aplicación del plan político de Jarpa, es necesario realizar previamente una caracterización del contexto global.

La comprensión de la reorganización partidaria de la derecha implica y requiere una caracterización del proyecto político de la dictadura militar.

Esta debe abarcar dos tiempos diferentes. Uno es el largo plazo, esto es el análisis del significado del régimen desde su instauración en 1973; el otro es el corto plazo, el estudio del momento específico de la crisis 82-83.

1. El contexto societal

a) El significado de la dictadura militar

Es bien sabido que la atribución de un carácter de clase al proyecto de una dictadura militar, sea ésta de carácter personal o institucional, plantea problemas conceptuales.

La apropiación del poder por parte de los militares es siempre el resultado de una crisis política de las clases principales de la sociedad, las cuales no estando en condiciones de asumir ellas mismas el poder político directo se ven forzadas a buscar una fórmula que entraña problemas y peligros.

El principal problema que plantea la delegación del poder político a los militares por parte de la clase dominante, consiste en que la relación de éstos con los medios de violencia les permite monopolizar sin contrapesos el poder político.

De este modo no solamente pueden construir un discurso de autonomía, sino que además pueden efectivamente autonomizarse por lo menos con respecto a los poderes de decisión sobre políticas y con respecto al respaldo coercitivo de esas decisiones.

La orientación del proyecto de los militares en el poder dependerá entonces, de la capacidad política de los diferentes sectores sociales por lograr influir sobre ellos.

Como se sabe las Fuerzas Armadas chilenas realizaron el golpe militar de 1973 como una decisión institucional, en oposición al proyecto de la Unidad Popular que fue definido, en el lenguaje político que adoptaron los militares, como la "amenaza de una dictadura totalitaria". El golpe militar fue una reacción anti-marxista y anti-izquierdista promovida activamente por la derecha de la época (El Partido Nacional y Patria y Libertad), estimulada solapadamente por algunos sectores demócratas cristianos, que la consideraban un mal menor, y aceptada como fatalidad inevitable por otros grupos del mismo partido, que adoptaron, frente a la actitud golpista desarrollada por la derecha, una posición pasiva y resignada.

La violencia desmesurada desencadenada el mismo día del golpe y en los momentos inmediatamente posteriores, cuyo símbolo fue el bombardeo de La Moneda, redujo evidentemente el margen de opción política de los militares golpistas. Es obvio que después de la muerte de Allende y de los innumerables asesinatos cometidos era imposible para ellos adoptar una política de continuidad o de acercamiento hacia los sectores populares. Pero esa restricción no limitaba a los militares en una opción única.

De hecho algunas de las fuerzas iniciales de apoyo del golpe militar, las más moderadas, eran partidarias de una dictadura de corta duración cuya principal tarea debería haber sido la restauración de una democracia representativa, seguramente con exclusión de la

izquierda. Pero estos grupos minoritarios fueron rápidamente derrotados.

Se impuso la estrategia de los grupos partidarios de una dictadura de larga duración que realizara una "refundación" de la sociedad chilena. Esta necesidad de empezar de nuevo se derivaba de un cierto diagnóstico histórico, basado en el argumento central que la decadencia nacional era el resultado del intervencionismo estatal promovido desde fines de la década de los treinta por los gobiernos del tipo "frente popular" y que había continuado sin cambios, pese a la existencia de un gobierno de derecha entre 1958 y 1964, hasta 1973, de este modo la crisis chilena, era descrita como una larga decadencia, que había llegado en 1973 a un momento culminante y paroxístico. Sus raíces se hundían en el pasado histórico; los males de Chile se remontaban a 1920 o a los "años de demagogia" de las coaliciones de centro-izquierda. Como la crisis era de larga duración las tareas refundadoras también debían serlo. No era posible borrar de una plumada un largo culto al Estado, intervencionista en lo económico y falta de competitividad.

La decisión fundante adoptada por los militares fue asignarse una misión histórica de carácter refundador. Entre las alternativas de restauración del estilo anterior de desarrollo, caracterizado básicamente por un capitalismo con régimen político democrático y pluralista donde el Estado jugaba roles decisivos de protección de la industrialización y de regulación de oportunidades sociales, y el de refundación, esto es drástica

reestructuración de las condiciones del desarrollo capitalista y de la forma estatal prevaleciente hasta 1973, los militares optaron por la segunda alternativa.

Esta opción podía adoptar dos formas diferentes, en relación al tipo de apoyo de distintas fuerzas en el interior de la dictadura militar. Los sectores nacionalistas ponían el énfasis en la transformación del régimen político, reemplazando la democracia liberal por formas de participación corporativas y en reformas económico-sociales que favorecieran la integración entre capital-trabajo, que aligeraran la intervención estatal pero sin entregar al mercado el papel de principal regulador de la economía, manteniendo -por tanto- un papel importante del Estado en el logro de una mayor equidad distributiva. Buscaban crear una sociedad capitalista, con integración conseguida no a través de la participación política sino de la participación en instancias económicas (comités de empresa, Consejo Económico y Social) y con disciplina conseguida a través de la internalización coercitiva del principio de autoridad, con un estado activo en el control de la economía y en la protección de las fronteras económicas nacionales.

Los grupos liberales, que más tarde adoptaron bajo la influencia de Friedmann y Hayek, los postulados teóricos y la visión de mundo del neo-liberalismo, entonces en boga en el mundo occidental, planteaban otro programa. Partiendo de la idea que la base de la democracia es la libertad económica, proponían un radical alejamiento del Estado de la esfera económica. Las decisiones

administrativas de la autoridad debían ceder el paso, en todos los ámbitos posibles, a las decisiones objetivas del mercado. La utopía o el modelo de funcionamiento era la sociedad autorregulada por el mercado.

La estrategia económica no solamente comprendía la liberalización de los precios sino también una incorporación creciente de la economía chilena en el sistema capitalista mundial. Esto significaba el abandono de la estrategia de industrialización sustitutiva con protección arancelaria y comercio exterior controlado y su reemplazo por una estrategia de desarrollo en las áreas de ventajas comparativas.

Este proyecto neo-liberal no solamente comprendía la liberalización de la economía sino contenía, además, como elemento central del diseño, una disminución de las esferas de decisión del Estado en áreas tan cruciales como la educación, la salud, la previsión y las relaciones laborales.

Mientras el proyecto nacionalista propugnaba una reforma corporativa del Estado y un desarrollo capitalista más apoyado en el Estado que en el mercado, el proyecto neo-liberal representaba el clásico modelo de modernización burguesa.

Frente a una derecha política históricamente incapaz de impulsar su propio proyecto de modernización burguesa, obligada a aceptar pasivamente los programas modernizadores que otras fuerzas habían impuesto (las coaliciones de centro-izquierda entre 1938-1947, la

Democracia Cristiana entre 1964-1970), los militares aparecen como una fuerza capaz de acometer ese proyecto. Tenían la totalidad del poder, lo que les permitía realizar una "revolución económico-social" que cambiara las condiciones del desarrollo capitalista; poder originado en el éxito de una contrarrevolución que destruyó el Estado precedente.

Después de un período de indecisiones, ambigüedades y políticas entrecruzadas los neo-liberales lograron imponer su proyecto de modernización. La contrarrevolución burguesa implicó destruir derechos y garantías conseguidos por los sectores populares en largos años de lucha democrática y reprimir al movimiento obrero. Esta segunda decisión, en la cual los militares se convierten en agentes propulsores del modelo burgués de modernización era imposible de aplicar en un sistema de competencia política democrática. Esto constituye un elemento clave para entender por qué las clases dominantes durante tanto tiempo han delegado su poder y soberanía (capacidad de decisión política autónoma como clase) a manos de los militares.

El hecho que la dictadura militar fuera la que realizara el proyecto de modernización burguesa tiene algunas implicancias que es importante destacar. Como anteriormente se ha dicho son las Fuerzas Armadas las que tienen el monopolio del poder político, el cual se concentra en los Comandantes en Jefe, entre los cuales predomina el del Ejército quien ejerce el rol de cabeza del Ejecutivo. El peso de los grupos civiles en las esferas de poder depende de su capacidad de influencia

sobre las cúpulas militares o sobre el círculo gobernante y no de algún atributo propio como fuerza electoral, capacidad movilizadora o nivel organizativo. En segundo lugar, pese a que las Fuerzas Armadas monopolizan la capacidad decisoria, no tienen capacidad hegemónica, los paradigmas con los cuales se toman las decisiones de política, tanto en el terreno económico, social y cultural, residen en un grupo de civiles, que vienen a ser los intelectuales orgánicos de la burguesía dominante.

De este modo el poder político, entendido como capacidad decisoria y de control sobre los medios de violencia, es monopolizado por los militares. Sin embargo éstos no realizan un proyecto propio, sino que ellos son ejecutantes de la estrategia de desarrollo de la burguesía transnacionalizada y se inspiran, como se ha dicho, en la lógica de pensamiento neoliberal.

Esa capacidad hegemónica de los intelectuales neoliberales se explica por el predominio que fueron adquiriendo dentro de una burguesía muy diversificada los grupos económicos con orientación modernizadora y vinculaciones transnacionales. Al principio la resistencia del empresariado tradicional, desarrollado en el marco de la industrialización protegida y del intervencionismo estatal, a las políticas ultra-liberales que se fueron imponiendo eran muy fuertes. El éxito obtenido por la política económica entre 1976 y 1980 diluyó esas críticas, en gran medida porque se modificó la correlación de fuerzas en el empresariado, como efecto de las políticas aplicadas,

produciéndose un doble movimiento convergente de concentración e internacionalización.

Los esquemas neo-liberales se impusieron en el seno de las organizaciones empresariales y con ello consolidaron su hegemonía en la cúpula gobernante, favorecidos por el "milagro económico".

Tanto la tendencia militar a monopolizar el poder formal, como el hecho que se hubiera consolidado una hegemonía burguesa, compatible con las orientaciones del "gran capital", explican que las clases dominantes no presentarán ningún interés en buscar formas partidarias de organización y que los grupos autoproclamados derechistas que surgieron (Derecha Republicana) no fueran representativos de las bases sociales tradicionales de la derecha chilena.

Sin embargo, justamente en el período en que resurgieron las organizaciones políticas de derecha, esa hegemonía estaba severamente cuestionada como efecto de la crisis económica que se hace patente en 1982.

b) La coyuntura 82-83

La coyuntura 82-83 estuvo marcada por los siguientes procesos: agravamiento de la crisis económica iniciada en 1981, inmovilismo del gobierno en el terreno político, desarrollo de procesos de unificación dentro de la oposición y estallido de una ola de movilizaciones sociales (las "protestas").

El año 82 y los primeros meses del 83 fueron decisivos en el desarrollo de la visibilidad social de la crisis económica. El 14 de junio de 1982 se procedió a una devaluación del peso, violándose de esa manera las promesas reiteradas de que se mantendría la estabilidad de la política cambiaria. Esa medida perjudicó severamente a todos aquellos que habían creído en las promesas gubernamentales y habían adquirido deudas en dólares. Además de ese efecto directo sobre una gran cantidad de agentes económicos, la medida tuvo un efecto colateral aún más importante que el anterior: provocó una crisis de credibilidad y confianza. Una de las grandes virtudes de Sergio de Castro como dirigente de la política económica gubernamental residió en su persistencia y tenacidad para mantener un modelo y ciertas políticas específicas (baja de aranceles, precio fijo del dólar por abajo de su valor real) pese a que ellas fueron en ciertos momentos muy atacadas o a que sus resultados sólo fueron exitosos desde 1976, con el agravante que se debió pagar un enorme costo social (cesantía, caída de los salarios, quiebras de empresas, etc.).

La devaluación de junio del 82 tuvo variados efectos, por una parte el abandono de las posturas dogmáticas puede ser argumentada como una flexibilización pero, por otra parte, se comprobó que era un mito la absoluta "cientificidad" de las políticas económicas.

La sensación de crisis y el clima de desconfianza se mantuvo durante todo el segundo semestre de 1982, pero

esa incertidumbre llegó a su punto límite con las intervenciones bancarias de fines de enero de 1983, dispuestas por el Ministro Lüders, ex alto ejecutivo de uno de los principales conglomerados económicos.

La intervención estatal de cinco importantes entidades bancarias, entre las cuales se contaba el banco privado más importante del país (Banco Chile); la liquidación de una serie de fondos mutuos en los cuales habían comprometido sus ahorros miles de inversionistas pequeños, medianos o grandes y la desarticulación de los dos más importantes conglomerados económicos (los grupos Vial y Cruzat-Larraín) produjo una verdadera hecatombe, que multiplicó la sensación ya existente de desconcierto y falta de credibilidad.

El abril de 1982 renunció el Ministro del Interior Sergio Fernández, quien había encabezado el gabinete desde 1978 durante un período crítico. La causa de la renuncia de Fernández fue el rechazo por parte del General Pinochet de un plan político cuyo elemento central era la aprobación rápida de las leyes constitucionales, entre las cuales estaba la que legalizaba los partidos políticos. El análisis de Fernández era que el rápido avance en el terreno político produciría una descomprensión que compensaría la pérdida de apoyo derivada de las dificultades económicas. Su programa incluía la mantención del equipo económico, la aceleración de las modernizaciones en los sectores de salud, educación, justicia y administración pública y la profundización de la política de privatizaciones parciales o totales de empresas públicas. Se trataba de

un programa en que combinaba un cierto aperturismo político, aunque con estricto cumplimiento de la Constitución, incluyendo la aplicación de las disposiciones antipluralistas, con la continuidad de la política económica neoliberal.

La renuncia de Fernández reactivó las disputas entre los diferentes grupos que competían por la influencia sobre los factores de poder, y en especial sobre Pinochet. La crítica fue encabezada por el grupo Nueva Democracia, el cual era el aparato político de los llamados "gremialistas", sector al que estaba vinculado el ministro renunciado. Planteaban la necesidad de retomar la ofensiva política y la defensa del modelo económico.

El mes de febrero de 1983 estuvo marcado por las especulaciones sobre la entrada al gobierno de los nacionalistas, lo cual implicaba endurecimiento político, congelación en la dictación de las leyes constitucionales y cambios en el modelo económico (mayor intervención estatal y políticas distribucionistas). Sin embargo, a fines de febrero, Pinochet, quien había permitido con su silencio que esas aprensiones cundieran, nombró un ministerio de continuidad.

Para contrapesar la actitud anterior el 11 de marzo, fecha en que se celebraba el tercer aniversario de la aplicación de la Constitución del 80, Pinochet lanzó un discurso de crítica a la democracia liberal y llamó a la formación de un movimiento cívico-militar, cuya organización fue encargada a Federico Willoughby, un

connotado dirigente... nacionalista.

Continuando su política pendular, Pinochet nombró a fines de marzo al ex-ministro Fernández, conocido por sus vinculaciones con Nueva Democracia y por sus discrepancias con los nacionalistas, a cargo de la comisión de elaboración de las leyes políticas.

Esta estrategia de balanceo entre los sectores llamados "blandos", partidarios de apurar la implementación de las leyes políticas para evitar que las demoras azuzaran el descontento y las críticas, y los sectores nacionalistas (considerados "duros" en el terreno político) restaba coherencia a la acción del gobierno.

En la primera quincena de abril tiene lugar la primera de una serie de "protestas", manifestaciones de descontento masivo que se realizaron con frecuencia regular hasta noviembre de 1984, en que fueron paralizadas por la dictación del estado de sitio. Esas manifestaciones masivas, que en sus primeras versiones tuvieron el carácter de verdaderas fiestas catárticas, modificaron el cuadro político haciendo patente la crisis del gobierno.

Este se demoró hasta agosto de 1983 en elaborar un plan político de respuesta. Unos días antes de la protesta programada para ese mes nombró ministro del Interior a Onofre Jarpa, ex-presidente del Partido Nacional, al cual se incorporó con los sectores parte de los sectores nacionalistas menos doctrinarios. El plan

de Jarpa tenía dos partes, estrechamente vinculadas entre sí. Para enfrentar la crisis política pretendía jugar la carta del "diálogo" con los sectores denominados democráticos de la oposición y para enfrentar la crisis económica buscaba el reemplazo de los neoliberales en la dirección económica por técnicos o personeros empresariales más pragmáticos y flexibles, que enfrentaran el endeudamiento interno. La magnitud que había alcanzado ese endeudamiento era considerado un foco de tensiones y desacuerdos con los sectores empresariales, lo que favorecía el distanciamiento con esa importante base de apoyo.

A diferencia de los grupos nacionalistas que después del golpe lideró Pablo Rodríguez, Jarpa combinaba la crítica a la política económica con una postura política aperturista. Respecto a lo primero no era un rupturista. Sus cuestionamientos no eran al modelo sino al dogmatismo en la mantención de ciertas medidas, por ejemplo en la fijación de la tasa de cambio o a la despreocupación por la suerte del conjunto del empresariado. En el terreno político tampoco lo era, en el sentido que participaba de los principios de la Constitución del 80. A diferencia del grupo Nueva Democracia que ponía énfasis en la elaboración más acelerada de las leyes políticas, Jarpa realiza una operación de "descomprensión" a través del "diálogo", con un sector de la oposición el cual produce efectos políticos de diferente índole. En primer lugar aumenta el distanciamiento entre la oposición de izquierda y la oposición que acepta el diálogo. En ese sentido tiene un efecto de polarización en el seno de esas fuerzas

opositoras, las cuales se nuclean desde entonces en multipartidarias opuestas. Por un lado está la Alianza Democrática que agrupa desde la Derecha Republicana hasta el Partido Socialista más moderado, pasando por la Democracia Cristiana, el radicalismo y la socialdemocracia.

Por el otro lado está el Movimiento Democrático Popular (MDP), cuyas fuerzas principales son los comunistas, los socialistas- Almeyda y el MIR. La participación de unos en el diálogo tensiona las relaciones entre ambas multipartidarias, lo que disminuye la propensión cooperativa del conjunto de la oposición y afecta el carácter de las protestas. Estas se concentran en los barrios populares y empieza a primar la barricada sobre el toque de cacerolas o sobre las velas de homenaje a los muertos. Las protestas van siendo más intensas pero menos masivas. Los enfrentamientos entre pobladores y fuerzas policiales efectivamente revelan fermentos de rebelión pero también favorecen el aislamiento de la protesta. Esta empieza a ser mirada con sospechas por los demócratas cristianos o los habitantes del "barrio alto", como si fueran parte de la estrategia comunista.

El otro efecto de la política de Jarpa fue la legalización de facto de varios partidos y el acelerado comienzo de un proceso de constitución de un sistema partidario ilegal pero tolerado. El fracaso de la política "dialogante" de Jarpa, fue en gran medida porque el gobierno intentó una apertura limitada en un momento de crisis en que las expectativas de la

oposición eran muy altas. Incluso el sector más moderado, que aceptó concurrir al "diálogo", tuvo una actitud maximalista. Sus reivindicaciones para la negociación con el Ministro del Interior incluyeron la renuncia de Pinochet y la formación de una Asamblea Constituyente. El tímido intento de "liberalización" en el marco de la Constitución del 80 que intentó Jarpa no encontró el interlocutor moderado que requería.

El frustrado "diálogo" de Jarpa aceleró la formación de los partidos y en especial el subsistema de partidos de derecha.

II. LA REAPARICION POLITICA DE LA DERECHA

Para el análisis del proceso de constitución de los partidos de derecha debe tomarse como fecha de referencia el nombramiento en agosto de 1983 del ministro Jarpa, cuyo plan de "descompresión política" permite el funcionamiento de hecho de los partidos y, en el caso de la derecha, desencadena la formación de una serie de nuevas organizaciones políticas.

Sin embargo, para poder entender históricamente el origen de algunos de estos partidos estudiaré suscintamente a los grupos políticos existentes antes de 1983.

1. Los grupos políticos de derecha previos a 1983

a) La Corporación de Estudios Contemporáneos

Este grupo, en vista de la proscripción legal de los partidos se presentó bajo la forma de un centro de estudios. Fue fundado en 1978 por algunos ex-militantes

de la Juventud Nacional.

Se trata de un grupo generacional, ligados por una experiencia política común, sin participación en el gobierno militar y con una ideología neo-liberal. Desde ese punto de vista, hacen suyos la mayor parte de los postulados de Hayek, especialmente su definición de la democracia como un medio para preservar la libertad individual y la concepción de que el Estado debe tener un ámbito restringido de atribuciones, restándole capacidad para sustituir la autorregulación por el mercado y para incidir sobre las decisiones rutinarias de los ciudadanos.

Pese a que comparte con el grupo Nueva Democracia la ideología neo-liberal, consideran que ese conglomerado y su líder Jaime Guzmán tienen una visión muy conservadora de la política. Los militantes nucleados en torno a la Corporación de Estudios Contemporáneos desconfían del origen católico tradicionalista de Nueva Democracia y se consideran a sí mismos como herederos del pensamiento liberal.

Uno de los planteamientos centrales de la Corporación

de Estudios Contemporáneos era afirmar la necesidad de una renovación de la política de la derecha. Por ello se mostraban contrarios a la reorganización del Partido Nacional, pues éste había sido la expresión de una "política defensiva" que podía haber sido necesario en el pasado, especialmente en la lucha contra la Unidad Popular, pero que no era la necesaria para "proyectar el futuro".

Este grupo se decía partidario de organizar una "nueva derecha", moderna, basada en la ideología neo-liberal, pero que tendiera a ubicarse en la centro-derecha del espectro político.

Respecto al gobierno militar se definían como neutrales, no estaban por identificarse con él ni por constituirse en fuerza opositora. El núcleo básico de sus posiciones era la intención de crear una fuerza de derecha moderna, que siendo autónoma del gobierno militar pudiera proyectarse como opción válida en la competencia democrática.

En la discusión constitucional del año 79 este grupo criticó el proyecto elaborado por la Comisión de Estudios

Constitucionales, por considerarlo inadecuado y alejado de las tradiciones democráticas chilenas. Respecto a la reelaboración realizada por el Consejo de Estado que presidía Jorge Alessandri lo consideraron aceptable con observaciones, algunas de ellas bastante importantes (composición del Senado, papel del Tribunal Constitucional y del Consejo de Seguridad Nacional). Respecto al texto definitivo, elaborado por el ejecutivo, también formularon numerosas reservas, relacionadas especialmente con las normas transitorias y con la mantención de los preceptos que habían criticado en el proyecto anterior.

Este Grupo no sobrevivió al reordenamiento del cuadro político, provocado por la política de "descompresión" de Jarpa. Sus militantes se repartieron entre las diferentes formaciones políticas que aparecieron en el segundo semestre de 1983.

b) "Nueva Democracia"

"Nueva Democracia" es la primera expresión política que adoptan los sectores denominados "gremialistas".

La figura más notoria es Jaime Guzmán, ellos elaboran sus planteamientos básicos inspirados en la interpretación tradicionalista de la doctrina social católica.

Postulan la necesidad de una autonomía de los poderes sociales frente al poder político y concretamente frente a los partidos, detrás de la cual hay un modelo de estructuración orgánico de la sociedad de carácter "corporativista". Su fuente inspiradora no es el fascismo sino las concepciones de los teóricos tradicionalistas españoles como Vasquez Mella, divulgados en Chile por Osvaldo Lira.

Este grupo "gremialista", cuyos principales dirigentes habían tenido papeles importantes en la lucha contra la Unidad Popular, se incorporan de lleno en el gobierno, constituyendo un grupo de influencia importante dentro del bloque en el poder. Entre los años 76-77 el "gremialismo", cuya inspiración ideológica provenía del catolicismo, fue mutando progresivamente hacia la ideología neo-liberal, la cual indudablemente no pertenece al mismo campo ideológico.

En 1979 el "gremialismo" apareció como expresión

En 1979 el "gremialismo" apareció como expresión política a través del grupo "Nueva Democracia", en un momento en que el debate ideológico entre los sectores de apoyo al gobierno entraba en una fase candente por el problema constitucional.

Guzmán en una entrevista en la revista "Que Pasa" señalaba una serie de condiciones para el restablecimiento de la democracia, mostrando las dificultades para obtenerla a corto plazo y, planteaba la necesidad de volver a este sistema con mucha lentitud.

Entre las condiciones de estabilidad que Guzmán señalaba se encuentran la existencia de un consenso básico de la "comunidad nacional" en torno a los valores y privilegios esenciales de una "sociedad libre"; el compromiso ciudadano con el sistema político, el cual debería ir desarrollándose como fruto de la experiencia de sus ventajas y beneficios; una reducción del poder estatal que dejara un amplio espacio a la libertad personal, la cual debía ejercitarse durante bastante tiempo como para "hacerse carne" entre los chilenos; la existencia de una cierta prosperidad material, conseguida por el pleno desarrollo de

la libertad económica, etc.

La tesis básica del artículo de Guzmán era que todavía había que cubrir etapas en la "modernización" de la sociedad chilena antes de pensar en la instauración de una democracia plena y que el régimen político del futuro debía combinar un presidencialismo fuerte y un Estado con atribuciones reducidas.

"Nueva Democracia" tuvo influencia en las diferentes esferas del proceso de elaboración de la Constitución. Algunos de sus miembros formaron parte de la Comisión redactora del anteproyecto, el grupo tenía fuertes vínculos con el presidente del Consejo de Estado y también con el Ministro del Interior. Sin embargo, fueron absolutamente incapaces de obtener un texto satisfactorio, con respecto a puntos que les parecían fundamentales, como era la ausencia de fiscalización parlamentaria en el período de transición o la rigidez de las normas de modificación de las disposiciones constitucionales.

Los "gremialistas" y posteriormente el grupo "Nueva Democracia", que estaban muy próximos a los economistas

monetaristas que dirigían la "política" económica, han cumplido importantes funciones ideológicas en el gobierno militar. Desde la Declaración de Principios del 11 de marzo de 1974 para adelante, estos sectores han proveído de una visión de mundo, han hecho un diagnóstico de la sociedad chilena y han dado base ideológica a la concepción de la democracia restringida que Pinochet, la pieza central del gobierno militar, ha hecho suya. Son ellos, especialmente Jaime Guzmán, quien proporcionó el diagnóstico del pasado que justificaba una "refundación de Chile" mediante un gobierno fuerte.

Más tarde, convertidos en voceros del neo-liberalismo, elaboran y difunden a través de los órganos de prensa que controlan o influyen (revista Realidad, semanario Qué Pasa, página editorial de El Mercurio), la concepción de la democracia como medio para preservar la libertad individual. También son ellos los principales elaboradores de la justificación de una transición larga y de la posibilidad de perpetuación de Pinochet.

El grupo "Nueva Democracia" fue la punta de lanza en la lucha contra los sectores nacionalistas, de quienes los separaba en el terreno político el rechazo de la

democracia liberal y el corporativismo y en el terreno económico las críticas a la dirección de la política económica y el supuesto populismo y estatismo de los nacionalistas.

c) La tendencia nacionalista

A diferencia de los "gremialistas" y de "Nueva Democracia" que corresponden a una realidad generacional, los nacionalistas pertenecen a grupos de edad muy diferentes y tienen experiencias políticas sumamente diversificadas. Algunos como Gastón Acuña y Sergio Miranda participaron del ibañismo, otros como Pablo Rodríguez y Eduardo Díaz vivieron la experiencia de "Patria y Libertad", algunos provienen de grupos nazistas, otros como Gonzalo Ibañez y Juan Antonio Widow estuvieron vinculados al grupo "Tizona", expresión del integrismo católico.

Sin embargo, pese a su diversidad tienen algunos elementos en común que los constituyen como tendencia y como grupo de opinión. Ellos son, en primer lugar, su rechazo de la democracia liberal como forma válida de

organización política. Esto tiene que ver con un rechazo de los partidos y una crítica al Parlamento político como "forma inorgánica" de representación, basada en artificiales divisiones ideológicas y no en intereses reales. En segundo lugar, los nacionalistas son críticos al neo-liberalismo como visión de mundo y como modelo económico. Su visión organicista de la sociedad se contrapone a la visión neo-liberal de la sociedad autorregulada por el mercado. Le asignan a la autoridad y, por ende, al Estado papeles muy importantes en la integración social, especialmente en la promoción de relaciones armónicas entre capital y trabajo. Por lo tanto son contrarios a la visión mercantilista con que los neo-liberales abordaban esta cuestión.

La tendencia nacionalista experimentó en abril de 1975 una derrota política de la cual no pudo recuperarse posteriormente. En esa fecha los economistas neo-liberales lograron imponer el programa de shock, consolidando de ese modo su poder en la dictación de la política económica y en la elaboración de la política social (modernizaciones), desde el ministerio dirigido por Fernández.

Desde entonces los nacionalistas intentaron variar el curso de la política económico-social, realizando una crítica bastante parecida a la de la oposición (costo social, privilegio a los sectores del gran capital, ausencia de instancias de participación de los trabajadores, políticas de atomización del movimiento obrero). Con la crisis que estalla en 1981 y que se agudiza en 1982, la ofensiva nacionalista se reavivó parcialmente.

La otra gran derrota política de los nacionalistas fue en la discusión sobre el camino institucional. Para poder influir organizadamente en ese debate crucial los nacionalistas lograron formar la Corporación de Estudios Nacionales, cuya presidenta era la hija mayor de Pinochet. Este Centro organizaba seminarios donde invitan a personalidades extranjeras, publican libros, permitiendo el intercambio de puntos de vista entre los sectores nacionalistas e intentan influir sobre Pinochet a través de su hija.

Los nacionalistas, cuyo vocero más importante es Pablo Rodríguez, se oponen al proyecto constitucional en cuanto éste instaure una democracia liberal

restringida. El punto central de discrepancia radica en la teoría de la representación. Rodríguez considera que los partidos no son canales adecuados de participación ni son instituciones necesarias del orden democrático, como tampoco lo es el Parlamento político. Oponían a la concepción liberal de la representación la concepción corporativa, que radicaba en los cuerpos intermedios y en las regiones. Los nacionalistas plantean la necesidad de una renovación integral del régimen político chileno y desahucian las formas liberales clásicas. En abril de 1983, un poco después de la realización de la primera protesta, los nacionalistas elaboran un Manifiesto en el cual apoyan a Pinochet pero llaman al gobierno a enmendar errores, rectificando la conducción económica y política. Además plantean la necesidad de modificar la Constitución. Estas demandas no fueron escuchadas.

Pese a su crítica doctrinaria a los partidos los nacionalistas organizaron su propio movimiento político durante el Ministerio Jarpa.

d) La formación de la Derecha Republicana

A fines de octubre de 1982 se reunieron un grupo de connotados políticos provenientes fundamentalmente de los partidos derechistas tradicionales (el liberal, el conservador y la fusión de ambos, el nacional). El objetivo era crear un movimiento de derecha democrática, escudándose bajo la fachada de un centro de estudios para respetar formalmente las limitaciones impuestas por el régimen a la formación de partidos políticos.

Para estos fines surgió el Centro de Estudios y Análisis de la Realidad Nacional e Internacional (CEARNI), autodefinido como "una instancia de espera, provisoria". Su objetivo era, cuando las circunstancias legales lo permitieran, formar una nueva agrupación de opinión política de "espíritu humanista amplio y tolerante, abierta al diálogo, esencialmente democrática, respetuosa del orden y del derecho y consecuente con la fisonomía institucional que fuera orgullo de nuestro país". Se planteaban como una colectividad defensora de los derechos humanos, contraria a las ideas totalitarias, cualesquiera fuera "su inspiración o pretendida justificación".

Este centro fue la antesala de la Derecha Republicana, partido que se decía inspirado en el pensamiento liberal moderno. Pretendía ser un "partido abierto" que, al igual que el gaullismo francés, fuera capaz de atraer a diferentes vertientes ideológicas hacia una gran organización de derecha democrática y modernizadora.

Los nombres políticos que en 1982 organizaron la Derecha Republicana, entre ellos Julio Subercaseaux y Armando Jaramillo, que habían estado entre los primeros disidentes derechistas, y que se habían vinculado al Grupo de Estudios Constitucionales o Grupo de los 24, en el cual estaba representado el conjunto de la oposición.

En el momento de la dinamización política de la derecha, este grupo continuó existiendo, bajo el nombre de Partido Republicano. Se incorporó a la Alianza Democrática, rompiendo con esto un gran tabú, de pertenecer a una instancia puramente de oposición.

2. Los movimientos políticos de la derecha entre agosto 83 y enero de 1987

Los límites del período de tiempo durante el cual se

estudiará la constitución de partidos de derecha son el nombramiento de Jarpa como ministro del Interior a mediados de agosto de 1983 y la formación de "Renovación Nacional", partido que unifica a una serie de movimientos derechistas en enero de 1987.

a) La formación de la Unión Demócrata Independiente (UDI)

El 20 de agosto de 1983, un poco tiempo después del nombramiento de Jarpa como ministro del Interior, el grupo "Nueva Democracia" anunció que estaba preparándose para constituirse como partido político. Sin embargo, el 10 de septiembre se informó de la postergación de la convención de "Nueva Democracia", durante la cual esta organización planeaba convertirse en partido. La razón aducida es que se estaba intentando la constitución de un "frente amplio", formado por todos aquéllos que apoyaban la Constitución del 80.

Sin embargo, sin que se conozca el resultado de esas gestiones de unificación, el 25 de septiembre de 1983 se formó la Unión Demócrata Independiente (UDI). Su Comité

Fernández, encargado de la comisión redactora de las leyes políticas; por Jaime Guzmán, integrante de esa misma comisión; por Javier Leturia, ex-presidente de "Nueva Democracia"; por Luis Cordero y Pablo Longueira, ex responsables de la Secretaría Nacional de la Juventud, entre otros.

La UDI afirmaba que su intención era aglutinar a los que compartían los "principios de una sociedad libre", definida como aquella en que el mercado y los cuerpos intermedios asumen un considerable cúmulo de decisiones, restringiendo el ámbito de atribuciones del Estado; a los que aceptan la Constitución del 80, afirmando que ésta estaba basada en principios humanistas y a los que estaban de acuerdo en la necesidad de un tránsito gradual desde el gobierno militar de Pinochet a la "plena democracia".

Según la UDI para hacer posible este avance pacífico y gradual se necesitaría de una serie de condiciones, de diferente naturaleza, entre las cuales se señalaban la necesidad de afrontar la crisis económica, impulsar el "desarrollo integral" para favorecer la "integración al sistema", completar las "modernizaciones sociales",

construir un consenso social amplio basado en "los valores de la chilenidad y de la sociedad libre" e instalar un Congreso antes de la fecha prevista, con el doble objeto de asegurar la "descompresión" política y favorecer el rodaje de las instituciones. Frente al gobierno de Pinochet afirmaban dos cosas : una posición de independencia y de crítica constructiva y la firme disposición de defender su estabilidad.

En el mismo manifiesto la UDI afirmaba una serie de principios generales de carácter doctrinario. Los principales eran los siguientes: a) la "dignidad suprema" del ser humano, el cual posee derechos que son "anteriores y superiores" al Estado; b) el principio de subsidiariedad, considerado la base de la "estructura social"; c) la "exaltación de la chilenidad" como valor fundamental de la acción política, lo cual significaba afirmar que hay vínculos que unen a los chilenos por el solo hecho de ser tales; d) la afirmación de que la democracia debe constituir la "forma normal" de gobierno, porque "es la mejor pese a sus vicios"; e) la creencia en el pluralismo ideológico como valor consustancial de la democracia, exceptuándose (por supuesto) a aquéllos que "buscan su destrucción"; f) la

necesidad de excluir a las doctrinas totalitarias y "a las personas y partidos que las promuevan"; g) la necesidad de defender un "sistema económico libre", basado en la propiedad privada y en la libre iniciativa particular, cuya expansión hará de Chile una "nación de propietarios"; h) la necesidad de renovar el estilo político, poniendo los principios por encima de los caudillismos.

Las reacciones de otros movimientos de derecha frente a la formación de la UDI fueron de sorpresa, en el caso de los nacionales, y de irritación violenta en el caso de los nacionalistas. Las declaraciones de estos últimos revelan la pugna histórica que separa a ambas tendencias. Federico Willoughby dijo sobre la UDI; "yo llamo agencia de empleos al gremialismo y empresa de demoliciones a los Chicago Boys, estos dos grupos se han juntado para tener un organismo de nombre de señora y matrimoniarse con cualquiera de los partidos tradicionales (sic)". Ese mismo dirigente agregaba, en otro órgano de prensa, afirmaciones aún más violentas: "Esos grupos tienen una cuenta pendiente con Chile porque han hecho un daño mayor en siete años que el que la Unidad Popular hizo en tres años, y paradójicamente,

mientras unos sufrieron el destierro, el encarcelamiento y las más drásticas sanciones de un proceso revolucionario, los otros han tenido la impudicia de adquirir un nombre de señora para actuar en política...". El tono de esas declaraciones muestran el abismo existente entre estas tendencias, que tienen en común el apoyo al régimen militar y a Pinochet, desde el momento mismo del golpe de 1973.

A los pocos días de su constitución la UDI demostró que pretendía tener un estilo político agresivo. El 9 de octubre de 1983 realizó una dura crítica a la Alianza Democrática, por el hecho que este conglomerado incluyera a un sector socialista marxista, aduciendo -según la declaración de la UDI- que aunque éstos decían haber dejado de ser leninistas y haber evolucionado hacia posturas democráticas, la UDI afirmaba la imposibilidad de esta transformación por "cuanto el marxismo era "absolutamente irreconciliable" con la democracia. La UDI realizó múltiples emplazamientos a la Democracia Cristiana: exigiéndole "inequívoca definición frente al marxismo".

El principal aporte de la UDI en cuanto a fórmulas

de transición fue la tesis de adelantar la instalación del Congreso. Esa tesis estaba contenida en el manifiesto de constitución, pero ella fue perfeccionada en una declaración de fines de octubre de 1983. En ella la UDI se pronunció abiertamente por un Congreso no elegido. Los comicios abiertos y competitivos eran considerados incompatibles con un régimen militar, pero a su vez la designación directa carecía de legitimidad. Basándose en esas consideraciones la UDI propuso que el gobierno designara una "comisión de hombres buenos", los cuales estarían en contacto con los diversos sectores, pero reservándose la autonomía resolutive, ellos deberían confeccionar una nómina de diputados y senadores que abarcara el espectro de "corrientes democráticas". La decisión final estaría entregada a un plebiscito que abarcaría la aceptación de la reforma constitucional respectiva y la aceptación de la nómina de parlamentarios. Según la UDI con la aprobación de esa reforma se arribaría en la práctica a una situación de cuasi "democracia plena", ya que el Congreso ejercería las funciones de legislar y de fiscalizar los actos del ejecutivo.

En julio de 1986, la UDI elaboró un nuevo manifiesto

titulado "Chile, ahora", el cual tenía un contenido mucho más programático que el anterior. La parte económica de la propuesta se basaba en la idea que un sistema económico libre es el fundamento de una sociedad libre. Las políticas que se proponían eran la reducción drástica del tamaño del Estado empresario, acrecentado por las intervenciones bancarias de enero de 1983; el fomento de la inversión global, especialmente de la inversión extranjera; en un esfuerzo por llevar a Chile hasta "las fronteras de la tecnología mundial que avanza incesantemente"; el fomento de las empresas a escala familiar, especialmente válidas por sus efectos sociales ("por la trama de vínculos y arraigos de personas y lugares"); el privilegio de una estrategia exportadora y la mantención de una economía abierta sin proteccionismos que evitaran la competencia y el riesgo; el perfeccionamiento de una legislación anti-monopólica que controlara concentraciones exageradas de poder y el manejo flexible de la deuda externa, junto con la necesidad de crear una conciencia internacional sobre el carácter "éticamente injusto y socio-políticamente explosivo" de que Latinoamérica se convierta en un exportador neto de capitales hacia el mundo desarrollado.

En la parte socio-cultural el manifiesto de la UDI proponía: a) un robustecimiento de la regionalización, con un decidido aumento de la autonomía para decidir respecto de sus realidades y programas propios", todo lo cual a la larga produciría la reducción de la hipertrofia metropolitana y una disminución del daño ecológico de las grandes ciudades; b) completar la modernización del sector salud, lo cual ha significado el desarrollo de una medicina privada de alta tecnología y eficiencia para sectores de ingresos medios altos y altos; c) el "reenfoque" del problema universitario, a través de la creación libre de universidades privadas, la participación de los académicos en la gestión de las universidades intervenidas, con la consiguiente eliminación de los rectores delegados y la exclusión por principio del cogobierno estudiantil; d) fortalecer la conciencia ecológica y preservar nuestro patrimonio biosférico y e) permitir la privatización de la televisión chilena.

En el terreno político la UDI proponía: a) la pronta promulgación y vigencia de las leyes políticas, lamentando el rechazo de la propuesta realista de

designación de un Congreso; b) la efectiva proscripción de las doctrinas totalitaristas, para lo cual debería reglamentarse rápidamente el respectivo artículo constitucional, ya que sólo de esa manera se podría impulsar la aceptación como actores válidos de todas las fuerzas no proscriptas y, por ende, el fortalecimiento del pluralismo político; c) el término definitivo del exilio, inútil en la medida que la aplicación de una efectiva proscripción política hace innecesario el destierro de los activistas de doctrinas violentistas y totalitarias; d) la flexibilización de los procedimientos de enmienda de la Constitución después de 1989, cuya exagerada rigurosidad se "usa como pretexto" para deslegitimarla; e) la afirmación de la necesidad de unificar a los diversos sectores y agrupaciones que comparten "los principios fundamentales de una sociedad libre".

Este manifiesto programático estaba centrado en dos ideas fuerza: a) impulsar decididamente la modernización de inspiración neo-liberal, desbaratando los prejuicios ideológicos del pasado que impedía, por ejemplo, acelerar la privatización de las prestaciones de salud o dejar amplio cauce a la inversión extranjera

y b) acelerar la dictación de las leyes políticas, pero asegurando la efectiva proscripción de los partidos totalitarios y prohibiendo la difusión de sus ideas.

La UDI, cuya actividad política ha tenido un permanente sesgo legalista, se transformó en una activa propulsora de la definitiva proscripción del Movimiento Democrático Popular (MDP), para lo cual hizo una presentación ante el Tribunal Constitucional.

De las numerosas propuestas legales o constitucionales que la UDI promovió ésta fue la que se jugaron más a fondo. Tanto la petición de elecciones abiertas como la proposición de un Congreso plebiscitado o la flexibilización de los procedimientos de reforma constitucional fueron abandonados apenas se visualizó la oposición gubernamental. La fidelidad a la Constitución del 80 y al programa económico-social de corte neo-liberal es el rasgo distintivo de la UDI. Por eso no tiene otro camino que el apoyo al gobierno y la aceptación de las posiciones de Pinochet.

Entre los partidos surgidos o reorganizados desde

agosto de 1983 y que apoyan una democracia de corte liberal, la UDI es el más dependiente políticamente de las decisiones de Pinochet, a las cuales siempre termina adhiriendo.

b) El Movimiento de Unión Nacional (MUN)

A mediados de septiembre de 1983 apareció en la prensa un manifiesto en que se llamaba a la "unidad nacional", se planteaban la necesidad de hacer un gran esfuerzo conjunto para escoger el camino del entendimiento y del diálogo, evitando el deslizamiento hacia la violencia. Para que eso fuera posible debía apoyarse la "apertura política" y corregir los errores de una política económica inflexible y la insensibilidad de quienes se habían despreocupado de la cesantía, los bajos salarios y el endeudamiento interno. El manifiesto apareció desde el primer momento, como un apoyo a la gestión de Jarpa. Uno de los gestores del manifiesto y de una campaña de recolección de firmas realizada para apoyarla era Andrés Allamand, joven político muy carismático, que en el período de la Unidad Popular lideró a los estudiantes secundarios de

oposición.

A fines del mes de octubre Allamand fue designado Secretario General provisorio del MUN. Este movimiento estaba concebido como una forma federativa de organización, un catch-all party de derecha, en el cual podrían integrarse, respetando su identidad ideológica, militantes de la Democracia Radical, del Partido Nacional, ex-demócrata-cristianos. Entre los criterios por los cuales fue elegido Allamand, después de múltiples gestiones entre los impulsores de la iniciativa, se señalaban su juventud y el hecho de no haber participado en actividades de gobierno.

Pocos días después se informó en la prensa que el MUN estaría integrado por la cuasi totalidad de los ex-parlamentarios del Partido Nacional, por ex-demócratas cristianos y demócratas radicales. Se ponía énfasis en el carácter federativo del nuevo movimiento. Se definía como "un partido de unidad en que confluyen los más variados sectores. Finalmente el 27 de noviembre se creó el MUN, en cuyo Comité Organizador figuraban básicamente ex-dirigentes del Partido Nacional como Allamand, Carlos Raymond, Luis Valentín Ferrada, Juan

Luis Ossa y Fernando Maturana. De hecho no se produjo la integración al MUN de los demócratas radicales o de los ex-demócrata cristianos. En la práctica no pasó de ser una organización competitiva del Partido Nacional.

La declaración de principios del MUN, mucho más escueta que la de la UDI, señalaba que con el nombramiento de Jarpa se había iniciado una etapa de "mayor participación política" y que para hacer efectivo este propósito era necesario crear un "movimiento político unitario, democrático, amplio y renovador". Esa organización inspirada por los "principios permanentes de la civilización occidental y cristiana" debería orientar su acción según las ideas de "chilenidad, justicia y libertad". Como tareas inmediatas se planteaban las mismas de Jarpa, "apertura política" y reactivación de la economía con criterios flexibles.

Se definió éste como un "partido programático", en el cual pueden, por lo tanto, coexistir diversas ideologías compatibles con la adhesión a los "principios de la civilización occidental y cristiana".

Respecto a las proposiciones sobre la transición, el MUN planteaba una posición muy similar a la de la UDI: adelantar la instalación del Congreso pero mantener hasta 1989 el mandato de Pinochet.

Pese a la negativa de los dirigentes del MUN de que eran el "partido de Jarpa", la organización constituyó un aparato de apoyo político de la "liberalización" desde arriba. Cuando esta opción política dejó de estar representada por Jarpa el MUN tomó crecientes distancias del ministerio e incluso del gobierno.

El momento culminante de este distanciamiento se produjo a mediados de 1985 cuando el MUN junto con el Partido Nacional y el Partido Republicano por la derecha firmaron el denominado "Acuerdo Nacional", junto con los demócrata cristianos, el Partido Socialista de la Alianza Democrática y la Izquierda Cristiana entre otros partidos. En ese momento parecía que el MUN había elegido el camino de un progresivo distanciamiento del gobierno, posición que los situaba bastante cerca de los nacionales.

Sin embargo el fracaso del plan Jarpa que no obtuvo

del gobierno concesiones, modificaciones constitucionales o la aceptación de las peticiones moderadas, como eran la de anticipar el Congreso o hacer elecciones abiertas, enfrentó al MUN a una difícil situación, o quedarse en la oposición y tener pocas posibilidades de participación, o sumarse a los sectores de apoyo al gobierno. El MUN optó por la segunda alternativa, redefiniendo de esta manera su estrategia política.

A comienzos de 1987 se lanzó en una operación de unidad con la UDI y el Frente del Trabajo de la cual surgió "Renovación Nacional".

c) El Partido Nacional

La reaparición

La reorganización del Partido Nacional (PN), el cual se había disuelto voluntariamente en 1973, fue un proceso largo y sinuoso, puesto que estuvo bloqueado durante largo tiempo por las negociaciones con el MUN.

A principios de octubre de 1983 surgió en el escenario un grupo de ex-dirigentes del Partido Nacional afirmando la necesidad de reorganizar ese conglomerado.

Salían al paso de ese modo a la tesis de "superar al Partido Nacional", ya lanzada por ex-dirigentes que compartían los puntos de vista del ministro Jarpa.

El sector partidario de la reorganización de este partido se dijo independiente del gobierno y sin responsabilidad en su gestión, pese a que aceptaban haber apoyado el golpe militar y el plebiscito de 1980. Otros elementos de su discurso, que lo acercaban a su competidor el MUN, fue la crítica a la UDI y al dogmatismo en la aplicación del modelo económico.

A mediados de diciembre de 1983 continuaron los intentos de los ex-dirigentes nacionales para dirimir el conflicto entre las dos líneas, una partidaria de reorganizar el partido fundado en 1966 y la otra ya lanzada en la formación de un nuevo referente político, el MUN. Setenta ex-parlamentarios del antiguo Partido Nacional decidieron formar una Comisión Mediadora que propusiera una fórmula. Este organismo presentó, a mediados de enero de 1984, una propuesta que era

absolutamente favorable al MUN. La fórmula de unidad de las dos colectividades que presentaron proponía, entre otras sugerencias, la formación de una Comisión Política con seis integrantes del MUN y tres nacionales y de un Comité Ejecutivo con cuatro del MUN y un nacional. Como era de esperar el PN rechazó la fórmula mediadora y decidió seguir adelante con su reorganización.

La importancia de la propuesta es que revelaba la actitud que estaban adoptando los antiguos "barones" de la derecha. Su inclinación favorable al MUN se explicaba por dos razones: el mayor acercamiento al gobierno de esa colectividad y su política de clara diferenciación con la Alianza Democrática.

Por lo tanto, en la estructuración del campo político de la derecha los nacionales quedan ubicados entre el Partido Republicano, miembro declarado de la oposición, y el MUN, que en ese entonces estaba muy cercano a Jarpa.

Hasta la formación de Renovación Nacional, los nacionales enfrentaron una política de alianzas sometida a una doble tensión: las ofertas y presiones para

participar de la unidad de la derecha y el acercamiento a la Alianza Democrática y en particular a la Democracia Cristiana.

De hecho el PN se integró en abril de 1984 al "Grupo de los Ocho" organismo que agrupó desde la UDI hasta el MAN. A principios de julio de ese mismo año las conversaciones de los nacionales con el Partido Republicano y con otros conglomerados integrantes de la Alianza Democrática despertaron reticencias dentro del conglomerado. La razón principal de las discrepancias surgió por la insistencia de los nacionales de que el "Grupo de los Ocho" debería definirse como claramente independiente del gobierno. A los pocos días el PN se retiró del "Grupo de los Ocho", porque éste no aceptó su política de mantener relaciones con la Alianza Democrática.

En octubre de 1984 propuso junto con el Partido Democrático Nacional (PADENA), un antiguo partido derivado del ibafismo y que en la coyuntura era de difícil clasificación, un pacto de "consenso democrático". En él las "dos colectividades" proponían: a) acelerar la aprobación de las leyes políticas (de

partidos, del registro electoral, del Congreso Nacional), de modo que estuvieran en vigencia (a más tardar en el primer semestre de 1985; b) elegir parlamentarios durante el segundo semestre de 1986 y c) modificar la Constitución del 80 en sus artículos permanentes y transitorios. Las modificaciones propuestas por los dos partidos afectaban a aspectos importantes del articulado, como aquél que sancionaba las conductas anti-democráticas o como aquéllos que fijaban las atribuciones del Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional. Se trataba de una propuesta de reforma muy completa, plenamente aceptable para la Alianza Democrática.

En agosto de 1985 los nacionales firmaron el Acuerdo Nacional, junto con los partidos de la Alianza Democrática y con la Izquierda Cristiana, siendo acompañados en ese momento por otro grupo de derecha el MUN. Sin embargo, mientras el MUN se sintió siempre incómodo dentro de los límites del Acuerdo, el PN se sentía a sus anchas, porque le permitía participar de una alianza amplia sin quedar aislado del resto de la derecha. Tanto es así que durante el año 86 suscribieron junto con la Democracia Cristiana un

documento que profundizaba las propuestas del Acuerdo, el cual recibió el nombre de "Pacto de Gobernabilidad".

Un test crucial para el Partido Nacional fue la formación de Renovación Nacional en 1987. En ese momento, cuando por iniciativa del MUN, se conseguía la ansiada unificación de la derecha, los nacionales prefirieron mantener su independencia.

La ruptura del Partido Nacional

A medida que se acercaba la fecha de designación del candidato se empezaron a visualizar dos sectores dentro del Partido Nacional. Uno que se inclinaba por negociar con el gobierno la transparencia en el proceso plebiscitario, de modo que nadie pudiera dudar sobre su legitimidad, y la garantía de que los resultados debían ser acatados. Esta tendencia insistía además en la necesidad de lograr un "acuerdo de todas las fuerzas democráticas con el gobierno", de manera de evitar que la campaña fuera confrontacional. Este sector implícitamente favorecía la búsqueda de un candidato de consenso. Patricio Phillips era el principal representante de esta corriente.

Había otro sector del partido, todavía no demasiado

amplio, que estaba claramente por apoyar en el plebiscito la opción del No lo más pronto posible, estableciendo para ello los contactos necesarios con los sectores de centro.

Para los dos grupos existía una política de consenso: dejar en claro que ellos eran "un partido democrático de una posición claramente independiente frente al gobierno". Ese punto sin embargo no bastaba para garantizar su unidad, aunque existía un acuerdo mayoritario para insistir, por un tiempo, en la fórmula en el candidato de consenso.

El Partido Nacional necesitaba dilatar la resolución de su posición frente al plebiscito y el argumento que permitía esta demora era la conveniencia de esperar de la designación del candidato para definir su posición. Este aplazamiento les permitía, de alguna manera, contener las tensiones en el interior del partido.

A fines de Mayo se rumoreó la renuncia del presidente del partido, se suponía que por las tensiones que producía la indefinición frente al

plebiscito . Indudablemente habían situaciones no resueltas. Mientras el presidente del partido se manifestaba contento con la conversación mantenida con Pinochet , el vice presidente mantenía reuniones con la DC y sostenía que era indispensable obtener un candidato de consenso , capaz de evitar la confrontación entre los chilenos y de permitir el paso a un gobierno de transición.

En la reunión del Consejo General del partido , realizada a mediados de junio se aprobó la tesis de la búsqueda del consenso, la cual se impuso, por estrecho margen, a la de apoyar inmediatamente la opción del No, aunque ambas posiciones se planteaban flexibles y abiertas . El texto del voto político triunfante planteaba, en líneas generales, la necesidad de mantener la independencia tanto del gobierno como de la oposición, llamaba al gobierno a abrir los medios de comunicación para todos los sectores , la obligación del partido de agotar todos los esfuerzos por lograr un candidato de consenso, de modo que solamente cuando se definiera el candidato adoptarían su posición frente al plebiscito .

A mediados del mes de Agosto, Phillips fue

cuestionado por un sector de la Comisión Política como presidente. Esta situación agudizó más aún los conflictos existentes en el interior del partido, quedando de manifiesto que el aparente acuerdo interno escondía profundas diferencias en el caso de ser nombrado Pinochet.

Una de estas tendencias era encabezada por el presidente del partido, Patricio Phillips. Este sector estaba por buscar un candidato de consenso, pero si éste se era nombrado preferían apoyar a Pinochet. El otro sector, encabezado por el vice-presidente del partido, Germán Riesco, se separaba del anterior luego del fracaso en la búsqueda del hombre de consenso. Si éste no era nominado su decisión era apoyar la opción No.

En la práctica la fórmula del candidato consensual era una manera de postergar el enfrentamiento de las diferencias internas de la organización. Pero con el cuestionamiento de Phillips a mediados del mes de agosto los ánimos se caldearon y el conflicto se escaló. Casi a fines de ese mismo mes se produjo la expulsión de Riesco, quedando de ese modo virtualmente quebrado el partido. Tal como irónicamente lo planteaba El Mercurio

en partido que pretendía lograr el consenso entre sectores del Sí y del No, no era capaz siquiera de resolver pacíficamente sus propias diferencias.

Al dividirse la organización el sector presidido por Germán Riesco aprobó un voto político en el que se señalaba que al no nominarse un candidato de consenso apoyarían el No.

Como se presuponía de antemano el 30 de Agosto fue nominado Pinochet por parte de los Comandante en Jefe. Al esfumarse las posibilidades de alcanzar un candidato de consenso se consumó la inevitable división de los nacionales. El sector de Riesco se incorporó a trabajar por el triunfo de la opción No mientras los sectores de Philipps apoyaron a Pinochet.

La actitud de este último era un reflejo de las vacilaciones de la mayor parte de los políticos derechistas. El grupo de Phillips hubiese preferido otro candidato, hizo lo posible por conseguirlo, dentro de sus escasos recursos. Definidas las FFAA terminaron apoyando a Pinochet. Un caso típico de opción de "mal menor", también realizada por RN.

d) El Partido Republicano

Este movimiento político se había creado antes de la "descompresión" política iniciada en agosto de 1983.

Hasta octubre de 1984 se denominaron Derecha Republicana; cambiando su nombre como consecuencia del ingreso a la Alianza Democrática del Movimiento Liberal y por no ser ellos los únicos representantes de la derecha.

Este grupo político representa el esfuerzo más temprano y más consiguiente por crear una derecha democrática. Sin embargo ha sido un partido con una capacidad limitada para nuclear a las antiguas bases sociales de la derecha, traumatizadas por la experiencia de la UP y reacios a entenderse con la DC o a los sectores empresariales, fascinados con una libertad económica sin restricciones y sin protección del Estado a los trabajadores. Pese a su definida voluntad democrática no tienen peso dentro de los sectores sociales que la derecha ha expresado.

El grupo político que se ha formado en el sector empresarial, fascinados con una libertad económica sin restricciones y sin protección del Estado a los trabajadores. Pese a su definida voluntad democrática no tienen peso dentro de los sectores sociales que la derecha ha expresado.

e) La creación del Movimiento de Acción Nacional
(MAN)

A principios de octubre de 1987 se reunieron bajo la convocatoria de la Corporación de Estudios Nacionales, una serie de dirigentes nacionalistas, entre los cuales figura Pablo Rodríguez, Federico Willoughby, Gastón Acuña, etc. Sus voceros afirmaron que el nacionalismo estaba por las fórmulas representativas, en las elecciones de las autoridades y en la separación de poderes. Su discrepancia básica con otros partidos consistía en que ellos sostienen que los partidos no debían monopolizar la acción política, debiendo dejar espacio a las organizaciones corporativas y a los independientes.

Aprovechando la atmósfera de "apertura política" creada por la gestión de Jarpa, los nacionalistas acomodaron su discurso político, eliminando aquellos aspectos que lo aproximaban a un discurso de corte fascista. Uno de ellos era la sistemática crítica a la democracia liberal en nombre de la "democracia

neo-orgánica". Pese a haber sido hasta entonces contrarios al aperturismo político, manifestaron su apoyo a la gestión de Jarpa, criticando sólo aspectos secundarios. A pesar de haber sido críticos a los partidos políticos se lanzaron a la creación de uno.

Esta actitud del MAN tiene quizás su explicación en una cierta desesperanza respecto a las posibilidades de éxito de un nacionalismo muy doctrinario y también en un cierto desencanto respecto a Pinochet. El nacionalismo había permanecido fiel a Pinochet pese a que éste había optado, en todas las coyunturas claves, a favor de los sectores neo-liberales. El nacionalismo veía que estaba pendiente la "verdadera revolución", pero se dio cuenta que para conseguir influencia tenía que adecuarse al marco de la Constitución del 80, en la cual se define como orden político ideal una "democracia liberal restringida".

Esta situación los llevó a integrarse al "Grupo de los Ocho". Este era una federación de movimientos derechistas donde también participaban los nacionales, el MAN, el MUN y la UDI, los dos últimos fuertemente influidos por el neoliberalismo. Al fracasar esta

agrupación se incorporó al Acuerdo Democrático Nacional (ADENA), una asociación más restringida de grupos derechistas, al cual también pertenecía el MUN.

Sin embargo la línea seguida por el nacionalismo al organizarse como movimiento y de mantener política de alianzas con otros grupos derechistas de tendencias disímiles no era compartida por todos los líderes de esa corriente. Tras la aparente unanimidad se escondían fuertes tensiones que se expresaron en la convención celebrada a fines de octubre. Un grupo, liderado por Pablo Rodríguez, propuso el retiro del MAN del ADENA y se pronunció a favor del "endurecimiento" de la política gubernamental. La convención fue ganada por el sector menos doctrinario y más realista que dirigía Federico Willoughby.

Sin embargo ese triunfo constituyó un éxito muy relativo porque a fines de año el MAN entró en una crisis que terminó con su disolución.

f) El grupo de Avanzada Nacional

En los primeros días de octubre de 1983 apareció en el confuso escenario político una nueva fuerza, Avanzada Nacional. En ella se incorporaron una serie de dirigentes y antiguos militantes nacionalistas. Ese nuevo movimiento se caracterizaba por su apoyo sin condiciones al gobierno y a la constitución del 80.

Desde su misma fundación el MAN había competido con Avanzada Nacional por la representación del nacionalismo. ¿Cuáles eran las diferencias entre uno y otro movimiento? Una de ellas era de naturaleza política: en un momento en que el gobierno y especialmente Pinochet enfrentaban graves conflictos y una merma considerable de su popularidad, Avanzada Nacional apareció encarnando la incondicionalidad al líder y un respeto sin concesiones ni acomodos a los plazos de la Constitución del 80. La otra diferencia radicaba en terreno doctrinario: el MAN representaba el nacionalismo ortodoxo de carácter corporativista, mientras que Avanzada Nacional preconizaba la fórmula de la "revolución militar" al estilo de Bordaberry. Usaban asimismo un lenguaje castrense ("Avanzada" es un vocablo militar que designa a las primeras unidades que se enfrentan al enemigo) y

alimentaban el culto a las FF.AA. Por ejemplo, en el "Manual de Doctrina" hacían suya una frase de Spengler: "siempre a última hora ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado a la humanidad".

Este movimiento se ha caracterizado por sus intentos de movilizar a las bases pinochetistas, organizando actos en los cuales el líder estuvo presente. En la práctica Avanzada Nacional se ha transformado en el "partido de Pinochet".

Recientemente Avanzada Nacional le ha formulado una propuesta de unidad a Renovación Nacional y a la Democracia Radical, otra pequeña formación de derecha para formar un movimiento político que apoyare la reelección de Pinochet en el plebiscito.

g) Renovación Nacional

La formación

A principios de enero de 1987 el MUN dirigió una propuesta pública de unificación a la UDI, al Partido Nacional y al Frente del Trabajo, una organización de

inspiración nacionalista y populista creada por Jarpa durante el año 1986. La propuesta era formar un partido en el cual concurrían fuerzas con diferentes pensamientos doctrinarios, cuyo consenso radicaría en ciertos principios y una visión común de la transición. Los principios eran la adhesión a la democracia representativa, la creencia en la necesidad de una "dispersión del poder estatal", la valoración de la "economía social de mercado" y la iniciativa individual, el rechazo del totalitarismo y la adhesión al "pronunciamiento militar del 11 de septiembre", indispensable para impedir el triunfo de una "dictadura totalitaria". Los puntos de vista sobre la transición se concentraban en la afirmación de la legitimidad de la Constitución del 80 y en la premisa de que las FF.AA. debían volver en 1989 a sus labores institucionales sin "menoscabo de su prestigio e integridad" ¹.

Inmediatamente de conocida la propuesta el secretario general del MUN, Andrés Allamand, inició una ronda de entrevistas con los dirigentes máximos de las

¹ Por motivos de espacio no podemos analizar detalladamente una serie de movimientos de derecha más pequeños como la mencionada Democracia Radical, el Frente del Trabajo recién creado en 1986, el Movimiento Social Cristiano, que se incorporó al Frente y el Movimiento Liberal.

organizaciones convocadas. En declaraciones formuladas en esos días Allamand precisó que la derecha debía recuperar su identidad, puesto que no podía ser delegada indefinidamente la defensa de los principios de una "sociedad libre". También rechazó en forma taxativa la posibilidad de mimetización de la derecha dentro de una coalición hegemónizada por la Democracia Cristiana. La insistencia de Allamand era que la derecha debía poner énfasis en su perfil propio, como única forma de incidir en el futuro de la transición.

Al ser consultado por las razones que llevaron al MUN a no incluir en la invitación ni a Avanzada Nacional ni a los partidos Republicano y Liberal señaló que los primeros no fueron invitados por ser contrarios a la democracia representativa y propiciar el corporativismo y los otros dos partidos habían sido excluidos por definirse como partidos opositores.

Finalmente, después de casi un mes de negociaciones, la UDI y el Frente del Trabajo, del cual también formaba parte el Movimiento Social Cristiano, aceptaron la propuesta de unidad del MUN. La fórmula organizativa adoptada fue el nombramiento por consenso de un

presidente ajeno a los partidos fusionados y la repartición proporcional de los diferentes cargos directivos.

El Partido Nacional decidió no aceptar la propuesta del MUN. La tesis central de los nacionales era que estaban invitados al nuevo partido sectores que no tenían un claro compromiso con la democracia representativa y tenían una visión autoritaria de la transición, como el Frente del Trabajo de Jarpa, y que por otra parte estaban excluidos grupos con un claro comportamiento democrático, como el Partido Republicano. Por otra parte al PN se le hacía difícil formar parte de una misma agrupación con quienes, como la UDI, tenían tanta responsabilidad en los errores cometidos en el pasado.

Con esta decisión los nacionales se definieron claramente por sumarse a la "derecha democrática", junto a los movimientos ligados a la Alianza Democrática como el Partido Republicano y el Movimiento Liberal. En agosto de 1988 una nueva crisis desgarró a esa organización, separando de ella a un grupo de militantes

que optó por apoyar a Pinochet.

La crisis de Renovación Nacional

Hemos considerado de interés, el análisis de la crisis y ruptura de Renovación Nacional, hecho ocurrido al año de su formación y cuando debieron enfrentar las primeras elecciones internas.

La inscripción de Renovación Nacional, de acuerdo al procedimiento acordado por la nueva ley de partidos, se llevó a cabo con un gran despliegue publicitario, ya que habían logrado vencer el obstáculo con casi el doble de las firmas requeridas.

Desde un comienzo su presidente se preocupó de aclarar que no habían fracciones dentro del partido. Sin embargo eso no era así, lo que no era raro puesto que se había creado como un partido de tendencias, conocido en la ciencia política como "consociativo". Estas quedaron de manifiesto en el proceso eleccionario de la directivas del partido.

Si bien es cierto que los consensos fundantes de este nuevo partido seguían siendo compartidos por todos los grupos (la defensa de la "sociedad libre", era frente a la política contingente donde se encontraban las mayores discrepancias .No había acuerdo respecto a una posible reforma de la constitución, ni sobre la sucesión presidencial y el grado de adhesión a Pinochet . En lo inmediato esto se expresaba en la posición del partido frente al próximo plebiscito.

Andrés Allamand, vice presidente del partido y representante de la ex UN, planteaba que " la comisión política (había acordado) iniciar un trabajo decidido por el triunfo del Sí en el plebiscito . En Renovación Nacional a nadie se le (pasaba) por la cabeza votar por el No, ya que perder el plebiscito sería una catástrofe para todo el país ".

Por su parte Guzmán , el otro vice presidente del partido , representante de la ex UDI , fue mucho más enfático respecto a sus apoyos. En una de sus declaraciones afirmó que "Renovación Nacional se (sentía) profundamente comprometida con los principios y la obra del actual régimen, que (cabía) calificar como

el más realizador que Chile haya tenido en el presente siglo". Por su parte J. Swett, que se ubicaba dentro de la misma corriente de Guzmán, hablaba sin ningún eufemismo respecto al apoyo de RN: "considerando que lo más probable que el candidato sea Pinochet, estimamos que RN no debe dejar lugar a dudas de que si así fuere, apoyara con entusiasmo la reelección del actual jefe de estado".

Contrariamente Allamand afirmaba que RN tenía la responsabilidad de no aceptar una adhesión ciega, fanática o sumisa al gobierno.

Respecto a la carta fundamental también se manifestaban discrepancias en el partido. Para Guzmán lo importante era ir más allá de "los pocos aspectos en que uno pueda estimar conveniente introducir alguna enmienda. Mis esfuerzos están dirigidos básicamente a difundir los múltiples y notables aciertos rectificadores e innovadores que tiene la carta fundamental de 1980". Por su parte Allamand se manifestaba bastante menos incondicional, planteando respecto de la Constitución que era "sin dudas una excelente base, pero ciertamente perfectible".

De este modo las primeras expresiones de las diferencias entre los sectores que integraban el RN, se refirieron a la Constitución, pero su punto más álgido eran los problemas políticos que planteaba la coyuntura plebiscitaria. Todo esto repercutía en pugnas por cuotas de poder interno que tenían que dirimirse en las elecciones de autoridades.

La primera presión por parte de la ex-UDI, la cual se sentía mayoritaria, fue el llamado a no votar en el acto eleccionario convocado por una directiva en la cual estaban en minoría. Para legitimar su postura adujeron faltas de garantías. Asimismo pidieron la renuncia al presidente del partido. En una conferencia de prensa "extraoficial" Jaime Guzmán propuso una fórmula de acuerdo para la repartición de los consejeros metropolitanos, lo que implicaba la asignación de 81 puestos para esa corriente y 41 para la alianza UN-FNT. También exigieron la renovación de los cargos directivos, el presidente y los dos vice-presidentes. Esta propuesta no fue aceptada por la comisión política, en una reunión a la que asistieron dos tercios de los miembros en ejercicio, con la ausencia concertada de los ex UDI.

Indudablemente para la ex UDI la presencia de Jarpa a la cabeza del partido era un obstáculo, porque podía intentar competir con la figura de Pinochet. Con Jarpa fuera de la presidencia se le eliminaba prácticamente de la política nacional. Por otra parte los sectores UN-FNT interpretaron las acciones del sector UDI, como una maniobra destinada a evitar por cualquier medio una posible derrota electoral.

Los resultados de las elecciones demostraron que habían diferencias que iban más allá del problema del poder. La UDI tuvo un significativo apoyo que se manifestó en una importante abstención, lo que no permite sostener, que la ruptura era motivada por una estrategia de perdedor. El problema fundamental estaba en la postura frente al candidato y el grado de incondicionalidad al gobierno.

Pese a numerosos intentos de conciliación las diferencias continuaron. El sector UN-PT pidió al tribunal supremo la expulsión de algunos importantes dirigentes de la ex-UDI, entre ellos el vice-presidente Jaime Guzmán. La decisión quedó pendiente.

Por otra parte la crisis de RN dejaba al descubierto otro problema, la viabilidad y funcionalidad de la misma ley de partidos. Tal como lo planteaban sus propios miembros "el proceso del partido interesa no sólo a sus afiliados, sino al futuro institucional del país". Efectivamente la normativa sobre los partidos era sometida a prueba nada menos que por los mismos que habían ideado el sistema.

Se buscaron diferentes soluciones que pasaran por mantener la unidad del partido, una de ellas fue la propuesta por un Comité Unitario, integrado por miembros de la comisión política del partido y que estaban fuera de las pugnas partidarias que en ese momento azotaban al partido. La propuesta no incluía las renunciias de la directiva, sino que se planteaba crear un espacio de negociación, que fuera más flexible y que permitiera el diálogo entre las dos fracciones.

El poco edificante espectáculo de la lucha interna suscitó algunas reacciones. El miembro de la comisión política William Thayer, planteaba que "lo único importante era unirse para trabajar por el '81", "unos

para que sea Pinochet, otros sea o no Pinochet y otros aunque sea Pinochet."

Para Jarpa el problema radicaba en la existencia de un partido dentro del propio partido. Con esto estaba calificando la actitud que tenía la UDI dentro del partido RN, acusándola de preocuparse más por sus posiciones de poder que por la unidad de la organización.

Finalmente en el momento que se realizaron las elecciones los sectores UDI tuvieron la más alta votación, sin embargo el porcentaje de abstención alcanzó alrededor de un 50%. Inmediatamente alcanzado el triunfo los sectores de la ex UDI plantearon la necesidad de coordinarse para trabajar por el triunfo del Sí, lo que consideraban un deber "patriótico urgente e ineludible".

Sin embargo el asunto no estaba resuelto puesto que estaba pendiente en el Tribunal Supremo la petición de expulsar a Jaime Guzmán, por su actuación frente a la crisis que el partido había vivido. Este organismo decidió por mayoría la expulsión. Según el Tribunal Supremo Guzmán había actuado al margen de los mecanismos institucionales internos del partido, dañando de esta

manera su funcionamiento y su unidad. Oficializada la expulsión inmediatamente presentaron su renuncia todos aquellos que provenían de la ex UDI .

Producido el quiebre en RN los sectores ex UDI anunciaron la creación de un movimiento político denominado UDI por el Sí, con el propósito de trabajar por la candidatura de Pinochet. Por su parte Jarpa, celebró la salida de este sector reiterando la idea de que la crisis tenía su origen en la existencia de un partido dentro del partido .

Junto al espectáculo que significaba la división del partido unitario de la derecha al corto tiempo de su formación, había una realidad muchos más importante. La ruptura ponía al descubierto las discrepancias respecto a la candidatura de Pinochet.

Producida la división, los dos sectores dejaron ver de manera explícita sus propuestas políticas. La ex-UDI se preparó a apoyar incondicionalmente a Pinochet como candidato único. RN planteó la tesis de apoyar el candidato que definieran los comandantes en jefes. Además insistieron en la necesidad de realizar una campaña lo

más amplia posible. En ese terreno discreparon con el ministro Fernández, puesto que este último planteaba que la campaña la debían realizar las organizaciones dependientes del gobierno. Jarpa en muchas ocasiones argumentó en sentido contrario: "hay que convocar a toda la gente que puede ayudar y no estar excluyendo a las organizaciones civiles o a los sectores políticos, porque si eso ocurre probablemente van a faltar votos".

Otra discusión que RN planteó fue la conveniencia de modificar la constitución para realizar elecciones abiertas y no el plebiscito ya que este favorecía al No: "como se ha visto en la práctica los grupos opositores no tienen inconvenientes para adoptar el acuerdo de votar No, pero sí tendrían muchos inconvenientes para ponerse de acuerdo y tratar de ganar una elección presidencial". Pero a fines del mes de julio las cartas ya estaban echadas y el gobierno no pensaba dar marcha atrás.

El que se esperaba que fuera el principal partido sostén de la candidatura de Pinochet y la expresión unitaria de la derecha no había resistido el primer año de vida ni las primeras elecciones internas. El próximo plebiscito los había dividido, puesto que tenían

diferentes grados de apoyo al gobierno y en particular al futuro candidato.

1944

1944

CONCLUSIONES

La derecha del período post-golpe presenta numerosos cambios respecto de la precedente. Estas modificaciones se refieren a tres aspectos principales: el número de partidos, la relación con la democracia y la actitud frente a la modernización.

Desde la reestructuración del sistema de partidos en los años treinta hasta mediados de la década del sesenta una de las características históricas de la derecha fue su bipartidismo, conseguido con la unificación liberal de 1932 y transitoriamente quebrada con la división conservadora entre 1949 y 1954.

Se realizaron numerosos intentos de crear fórmulas alternativas que desplazaran a los partidos tradicionales, fenómeno especialmente frecuente en la década del treinta. Pero todos fracasaron o bien derivaron en otra cosa.

Posteriormente, durante el gobierno de Frei los dos partidos históricos de la derecha, a saber el liberal y el conservador, se unificaron, formando el Partido

Nacional. Esta nueva organización tuvo algunas características resaltantes. En primer lugar convergieron en su formación dos concepciones filosóficas muy diferentes, la conservadora y la liberal, separadas por años de luchas doctrinarias. Ellas se combinaron, en un modo de articulación sincrético, con otras dos corrientes, el nacionalismo, tendencia separada hasta entonces de la derecha política y el alessandrismo, una forma particular de enfoque liberal-tecnocrático. En circunstancias especiales de la lucha política crearon un partido con referencias ideológico-doctrinarias más fuertes que las de los antiguos, cuya capacidad hegemónica estaba anquilosada por una política pragmática y defensiva.

En segundo lugar la lucha contra los programas reformistas de Frei acentuó la radicalización política de la derecha, uno de los efectos centrífugos provocados por la Democracia Cristiana. Si bien la derecha siempre prefirió un Estado de pluralismo restringido, como el impuesto en 1948 con la aprobación de la proscripción legal de los comunistas, debió adaptarse a las modificaciones de la correlación de fuerzas. Para la participación dentro de un sistema de competencia

electoral habían necesitado elaborar un discurso democrático de orientación liberal. La situación de polarización desplegada durante el período de Frei los llevó a plantearse la problemática de la relación conflictiva entre democracia y desarrollo económico, uno de los ejes del programa de la "Nueva República" que planteó Alessandri en 1970. Mantenían un discurso democrático, pero su carácter sustantivo y no puramente ritual, estaba debilitado como consecuencia del deterioro de oportunidades políticas que desde 1964 venía experimentando la derecha.

Entre 1970 y 1973 este partido, junto al movimiento gremialista que se había desarrollado en la Universidad Católica y al grupo de extrema derecha Patria y Libertad, fueron los que propiciaron e incitaron de manera más abierta, primero a la desobediencia civil y más tarde al golpe militar. Lo hicieron, aunque parezca paradójal, con un discurso democrático que apelaba a la necesidad de una restauración y que incitaba a combatir a los enemigos de la libertad.

Inmediatamente tomado el poder por parte de los militares, el Partido Nacional se disolvió

voluntariamente. En esa ocasión seguramente no se pensó ni se esperaba que aquella auto-disolución fuera a durar tanto tiempo. Pero lo importante es la manera como la derecha cedió el poder a los militares. Lo hizo renunciando de hecho a una fórmula de representación, como si los militares fuesen una extensión de la clase. Al disolver el partido y aceptar (más bien impulsar y aplaudir) el cierre del Congreso renunciaron a su soberanía política, en la medida en que aceptaron la instauración de un régimen político carente de ámbitos de disputa entre proyectos e intereses.

Esta decisión la tomaron en un momento en que el programa de "contrarrevolución burguesa" de corte liberal no estaba todavía ni elaborado ni era predominante. La derecha mantuvo su fidelidad a este proyecto, que poco a poco fue adquiriendo hegemonía, en tanto vivían un clima de estabilidad y sentían asegurado su poder económico, lo que ocurrió hasta la crisis de 1983.

En ese sentido se puede hablar de una derecha con una actitud retaguardista y que no aspiraba a jugar un rol protagónico en la conducción política del país, porque le parecía imprudente competir con los militares

por el poder. La derecha se conformaba con tener una gran influencia dentro del régimen.

Sin embargo, tal como se ha dicho, desde los inicios del gobierno militar ya se expresaban diferentes tendencias dentro de la derecha, algunas de las cuales se separaron del conjunto, intentando rescatar el proyecto de una derecha democrática. Eran, sin embargo, minoritarias.

Este hecho constituye un elemento muy importante para entender la actual derecha política. En los años 1974 y 1975 comenzaron a manifestarse de modo más o menos coherente algunas tendencias dentro de este sector. Lo interesante es que aquellas tendencias no expresaban la continuidad histórica, lo que había sido la derecha hasta 1970, esto es una fuerza que tenía pretensiones de poder y por eso optaba por un sistema de competencia electoral.

La mayor parte de la derecha se adecuó fácilmente a las nuevas circunstancias y mostró una capacidad de "modernización adaptativa", en el sentido que asumió un comportamiento propiamente burgués, incorporando el

discurso neoliberal de manera muy rápida y que aceptó, simultáneamente, el autoritarismo militar.

Para ello mutó su discurso democrático. Con gran rapidez y fuerza se desarrolló un planteamiento autoritario y una lectura histórica de Chile en que la presunta decadencia era achacada a la democracia. Esta visión estaba nitidamente presente en los sectores de ultra derecha, pero indudablemente sólo estaba latente dentro de la derecha tradicional.

Con posterioridad al golpe, las opiniones con que las diferentes tendencias de derecha que apoyaban al gobierno (neo-liberales y nacionalistas) se presentaron en el escenario político tenían un carácter claramente autoritario.

La unidad de estas tendencias disímiles se realizó en torno a la idea de "la refundación de la sociedad chilena", lo que en la práctica implicaba esperar un tiempo indefinido para retornar a un régimen democrático. El golpe revela la existencia en la derecha de una concepción totalmente instrumental de la democracia. En la práctica ésta era considerada como un medio a veces

útil pero que en circunstancias críticas era necesario dejar de lado o postergar.

La facilidad con que transformaron su discurso mostró características de la derecha que eran inéditas. Se conocían sus reservas frente a un régimen de pluralismo amplio pero no su concepción manipulativa de la democracia. La preparación del golpe a nombre de la libertad, el apoyo irrestricto a la represión en la medida que era instrumento de recomposición del orden capitalista echó abajo un mito que se había construido sobre la derecha, en el sentido que esta tenía una vocación democrática y un gran apego al orden constitucional.

Su comportamiento político pre y post golpe, mostró otra realidad, apareciendo una derecha que no sólo estaba dispuesta a levantar un discurso autoritario sino que argumentaba en contra de las formas democráticas de gobierno, planteando que esas prácticas políticas fueron las que desencadenaron una crisis de la sociedad.

La crisis económica y política que se desencadenó en 1981 asustó a la derecha. Habían delegado parte

importante de su poder a cambio de estabilidad económica y tranquilidad política . Si aquellas condiciones no se cumplieran, el traspaso de la soberanía política no se justificaba.

En esas circunstancias empezó a generarse un proceso de cambio, impulsado por la crisis de 1982 . Las elites políticas hasta entonces dispersas se vieron en la necesidad de organizarse partidariamente, también en respuesta al avance y desarrollo de la organización de las otras fuerzas políticas . Los realineamientos importantes sin embargo comienzan a producirse a partir de 1983, durante la gestión de Jarpa. Con posterioridad, en el momento del fracaso de su plan, adquirieron mayor fuerza.

La delicada coyuntura política de 1983, en la que el gobierno enfrentó una fuerte crisis , tuvo su expresión más gráfica en las protestas, en las cuales participaba el espectro completo de la oposición. Esta situación hizo que el campo político se reactivara y que en la derecha aparecieran múltiples grupos que plantearan diagnósticos y soluciones diferentes.

En esas circunstancias aparecieron tres grandes tendencias bajo las cuales se identificaban los muchos movimientos y partidos en surgimiento. Una tendencia, quizás la más fuerte o que tenía mayor influencia en el gobierno, era la neo-liberal, representada por la UDI y en menor medida por el MUN. Otra tendencia era la que representaba la continuidad con el comportamiento más típico de la derecha, antes del golpe. En esta posición se podría ubicar a la Derecha Republicana en primer lugar, y en alguna medida también el Partido Nacional. Estos partidos son los que han estado desde el comienzo en una posición más distante del gobierno.

El tercer sector son los nacionalistas, tendencia que ha mantenido una gran lealtad política al gobierno, pero con la diferencia respecto de los neoliberales que no han logrado tener la influencia, ni el poder alcanzado por esos sectores más modernos. Se ubican bajo este pensamiento el MAN y Avanzada Nacional. Este es un sector que ha entregado su apoyo incondicional a Pinochet, y que dentro de la derecha representa a los grupos más reaccionarios.

En esta nueva situación, configurada a partir de

1983, la primera cosa que llama la atención es la tendencia a la multipartición, porque si bien es cierto se puede reubicar la diversidad en tres grandes sectores, en la práctica por problemas de poder y de liderazgo, han surgido y permanecido muchos grupos y movimientos que son lo suficientemente diferentes como para no ceder espacios de poder.

Esto se vio por ejemplo, a comienzos del año 1987, cuando se organiza el movimiento Renovación Nacional, en un intento por formar un partido de tipo instrumental. Ninguna tendencia estuvo dispuesta a perder su identidad produciéndose el posterior desenlace ya analizado.

Resalta otro fenómeno significativo: en algunos de los movimientos de derecha surgidos recientemente se aprecia un importante contingente de dirigentes jóvenes. Esto ocurre especialmente en la UDI y RN. Casi se podría decir que aquellos partidos que lograron perfilar dirigentes nuevos son los que tienen una mayor capacidad de readecuación a circunstancias nuevas, las cuales exigían una flexibilidad y un desapego en relación a la tradición, que era más fácil para los jóvenes.

Se aprecia en alguno de estos partidos de derecha un nuevo estilo, que corresponde a una concepción más culturalista de la política, que le da importancia a la reforma del sentido común y también se aprecia una concepción instrumental de la democracia. Su utopía es una sociedad libre, autorregulada por el mercado y su implantación justifica el uso de cualquier medio político. En ese sentido no han tenido inconvenientes en justificar las constantes violaciones de los derechos humanos o los costos sociales, etc.

Sin embargo en otros aspectos repite comportamientos que podríamos llamar históricos : se trata de la tendencia atávica de la derecha a adoptar en algunas coyunturas políticas estrategias defensivas que la hacen quedar en una posición de subordinación respecto de otras fuerzas políticas . Siguen actuando con criterios de "mal menor", como lo demostró RN y una parte del PN en la coyuntura del plebiscito.

Por su parte la derecha democrática no ha logrado aglutinar en torno a sí un sector políticamente importante. Las características del régimen generan espacio para el surgimiento de una oposición de derecha,

que pudiera jugar un papel más al estilo de las derechas europeas. Frente a la coyuntura plebiscitaria, un sector del Partido Nacional asumió una posición abiertamente distante del gobierno y en particular de Pinochet. Después de una larga espera del candidato de consenso, definen su opción por el NO, comprometiéndose cada vez más en la lucha por la recuperación de la democracia. Ese sector, junto con el Partido Liberal y con algunas personalidades inscritas en el PPD, deberían constituir el núcleo de una derecha democrática.

Actualmente la realidad muestra una derecha dividida en múltiples sectores, a pesar que en un momento tuvieron la lucidez de advertir la necesidad de la unión para enfrentar el plebiscito. Sin embargo ella duró poco, ni siquiera hasta el evento electoral.

Como resultado de esa política, quedaron en una condición doblemente desventajosa: que por una parte demostraron que eran vulnerables a las imposiciones de Pinochet y por otra parte sufrieron la derrota, quedaron desunidos, acusándose y buscando culpables por distintos lados.

A su vez, el sector minoritario que se incorporó a la concertación del NO ha quedado en una posición débil para cualquier negociación, pasando a ser un partido que debe sumarse a la políticas que proponen fundamentalmente los sectores de centro.

Parece ser que la derecha incorpora parcial y lentamente las experiencias políticas. Actualmente vuelve a plantearse "el firme propósito" de alcanzar una unidad que le permita entrar en el escenario político en condiciones de mayor poder de negociación. Tal como se ha visto anteriormente, a lo largo de los años de régimen militar, estos sectores han hecho una transferencia de su soberanía política. Es decir, no vieron como necesidad o exigencia de un momento el ser ellos los protagonistas y defensores de las posturas de clase, cedieron sus derechos a los militares. Esa situación no es fácil de revertir porque favorecieron la expansión de una cultura política autoritaria entre sus bases de apoyo.

La creación de una derecha democrática con legitimidad histórica, conquistada en estos años de dictadura, es básica para la conformación de un sistema

político estable. Pero enfrenta, al mismo tiempo, numerosas dificultades. Es indispensable crear entre las bases de apoyo de ese sector social una cultura política democrática, superando la concepción instrumental que liga la aceptación de ese tipo de régimen político a su desempeño clasista.

